

# I. Disposiciones generales

## JEFATURA DEL ESTADO

**10686** *CORRECCION de errores de la Ley 7/1982, de 31 de marzo, por la que las funciones del Cuerpo de Máquinas de la Armada son asumidas por el Cuerpo General de la Armada.*

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación de la citada Ley, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 80, de fecha 3 de abril de 1982, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

El sumario debe entenderse rectificado en los siguientes términos: «Ley 7/1982, de 31 de marzo, por la que las funciones del Cuerpo de Máquinas de la Armada son asumidas por el Cuerpo General de la Armada.»

Entre la fórmula de sanción y el artículo primero debe figurar el siguiente preámbulo:

«La reorganización del antiguo Cuerpo de Maquinistas de la Armada, efectuada por la Ley de veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro, que creó el Cuerpo de Máquinas de la Armada, estaba fundamentada en la necesidad de disponer de un personal con la formación militar, naval, técnica y científica adecuada para dirigir y mantener los sistemas de propulsión de los buques, evolucionados por el desarrollo de la técnica y progresiva complejidad de las instalaciones entonces existentes.

El progreso tecnológico actual y su aplicación a los complejos sistemas y equipos de las unidades de la Armada ha supuesto un notable aumento de las técnicas utilizadas en el buque. Este desafío tecnológico se ha resuelto satisfactoriamente hasta ahora mediante la creación de nuevas especialidades del Cuerpo General, sin necesidad de recurrir a nuevos cuerpos de carácter eminentemente técnicos, como se hizo en su día con el Cuerpo de Máquinas.

Por ello, la separación de los Cuerpos General y de Máquinas, que tuvo su razón de ser en la época en que el aparato propulsor de los buques era prácticamente el único servicio a bordo que necesitaba de competencia tecnológica, resulta hoy inadecuada, ya que tanto los Oficiales del Cuerpo General como los de Máquinas ejercen funciones que requieren técnicas de similar complejidad.

Por otra parte, hace tiempo que la Armada siente la inquietud de resolver los problemas derivados de tener encuadrados en dos Cuerpos a Jefes y Oficiales que aunque reciben formación específica distinta tienen los mismos sistemas de ingreso, selección y ascenso y la misma formación militar, reciben en parte la misma formación científica y práctica y conviven a bordo y en tierra desempeñando a veces destinos comunes, sin poder tener, no obstante, las mismas oportunidades y progresión de carrera en el ejercicio de su profesión. Esto es debido a que el ejercicio de la función técnica sólo ocupa, generalmente, la primera etapa de los Oficiales del Cuerpo General y del Cuerpo de Máquinas, y si bien los primeros continúan su carrera ejerciendo otras funciones de mando y responsabilidades adecuadas a sus empleos, los del Cuerpo de Máquinas, por corresponderles funciones eminentemente técnicas, tienen limitados sus destinos específicos en los empleos superiores, con el consiguiente desequilibrio en la estructura de su escalafón y desaprovechamiento de la formación, conocimiento y experiencia que adquirieron a lo largo de su vida militar.

En el futuro la evolución de la técnica puede obligar a definir nuevas calificaciones de los Oficiales del Cuerpo General y a diversificar las características de su preparación, pero bajo el principio que persigue esta Ley: un solo Cuerpo, con la misma formación básica para todos sus componentes, que abarque las técnicas necesarias en todo momento.

Por todo lo expuesto, como primera de un conjunto de medidas que se prevé, deberán tomarse en el futuro para mantener la eficacia de la Fuerza Naval, fin primordial de toda modificación que se introduzca en la organización de la Armada, y de acuerdo con el principio antes citado, es necesario asignar al Cuerpo General las misiones que ahora desempeña el Cuerpo de Máquinas, extinguiendo este último en los términos que se previenen en la presente Ley.»

**10687** *REAL DECRETO-LEY 8/1982, de 30 de abril, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas.*

La experiencia recogida en la aplicación de la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar ha puesto de

relieve muy importantes anomalías en la modalidad que recae sobre la explotación de máquinas o aparatos automáticos.

Por una parte, ha puesto de manifiesto el beneficioso tratamiento fiscal que soportan, pues mientras la generalidad de los juegos quedan gravados al tipo proporcional del veinte por ciento que se gira sobre una base imponible constituida por el importe total de las cantidades jugadas, en cambio las cuotas fijas que recaen sobre aquellas máquinas o aparatos —tal como fueron establecidas por el Real Decreto-ley nueve/mil novecientos ochenta, de veintiséis de septiembre, que modificó el apartado cuarto del artículo tercero del Real Decreto-ley dieciséis/mil novecientos setenta y siete, de veinticinco de febrero— están muy lejos de representar el porcentaje señalado respecto de las cantidades jugadas, cantidades que, además, como es público y notorio, experimentan un crecimiento progresivo y continuado. Especialmente significativo es el caso de las máquinas de tipo B, o recreativas con premio, que en la actualidad están gravadas con una cuota anual de seis mil pesetas lo que, al tipo normal establecido para otras modalidades de juego, significa presumir que la cantidad que se juega anualmente en este tipo de máquinas es de treinta mil pesetas, cifra que, parece innecesario destacarlo, queda muy por debajo de la realidad.

Puede afirmarse que, con independencia de otras posibles causas, la situación actual viene motivada por el sistema establecido en materia de devengo y pago de la tasa. Efectivamente, la tasa es exigible por años naturales, devengándose el primero de enero de cada año, cualquiera que sea la fecha de la autorización o permiso, pero el interesado no está obligado a presentar la correspondiente declaración-liquidación hasta el año siguiente, dentro de cuyos primeros veinticinco días naturales debe realizar el ingreso. La necesidad de esperar a que transcurra el año natural, estaba justificado en el régimen establecido en el Real Decreto-ley dieciséis/mil novecientos setenta y siete, de veinticinco de febrero, es decir, antes de la modificación operada por el Real Decreto-ley nueve/mil novecientos ochenta, de veintiséis de septiembre, cuando las máquinas o aparatos automáticos seguían la norma general de abonar el veinte por ciento sobre las cantidades jugadas, ya que esto comporta la necesidad de dejar transcurrir el mencionado periodo de tiempo para conocer el importe de la base, pero no tiene justificación con el sistema actual de cuotas fijas, donde el transcurso de tiempo entre la autorización y el pago favorece indudablemente que el interesado, incluso por simple descuido, deje de abonar la tasa, sobre todo si se tiene en cuenta que la sanción por omisión es muy pequeña.

Este sistema de pago de la tasa ha provocado que la Administración no haya podido obtener hasta fecha muy reciente conclusiones definitivas. En efecto, ha tenido que esperar a que transcurriera el mes de enero del corriente año para conocer los resultados recaudatorios de un régimen que fue implantado a finales del año mil novecientos ochenta. Y estos resultados no han podido ser más significativos en apoyo de los dos extremos indicados: que la cuota que soportan las máquinas es extraordinariamente baja en proporción a las cantidades que se mueven en torno a las mismas y que el sistema establecido para el pago de la tasa facilita el impago de la misma.

Las circunstancias señaladas han conducido a una situación insostenible en materia de fiscalidad del juego que se hace necesario corregir con urgencia. Por una parte las máquinas y aparatos automáticos han experimentado un desarrollo tan desmesurado que, con independencia de otras posibles consideraciones ético-sociales, han dado lugar a una notable retracción de otras modalidades de juegos fiscalmente más controladas, sin la correspondiente contrapartida del incremento en la recaudación, y por otro lado, el ritmo de crecimiento que venían experimentando los ingresos procedentes de esas otras modalidades se ha visto cortado en los momentos actuales.

La presente disposición pretende atajar el problema planteado actuando en las siguientes direcciones:

— Elevando las cuotas fijas de las máquinas o aparatos automáticos en una medida que si puede parecer de cierta consideración —de seis mil a cuarenta mil pesetas— para las máquinas de tipo B, recreativas con premio, queda todavía muy lejos del tipo normal de gravamen (veinte por ciento sobre la cantidad jugada) que soportan otras modalidades del juego.

— Modificando el sistema actualmente vigente en cuanto al devengo y pago de la tasa: por una parte, se establece que en el año de autorización de la máquina el devengo coincidirá con la fecha de aquella, estableciendo la obligación de que el pago de la tasa fiscal preceda a la autorización gubernativa; y, por otra, se mantiene como fecha de devengo, para los años posteriores al de la autorización, la de uno de enero, si bien para evitar que el transcurso de un largo período de tiempo entre la fecha del devengo y la de pago de la misma facilite el impago, se modificará la normativa reglamentaria, estableciendo